

Capítulo 2

Las finanzas públicas y la economía

2.1. BALANCE FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, lo que indica si recauda suficientes recursos para cubrir sus gastos. Un saldo negativo resulta en un déficit y uno positivo en un superávit. Déficits fiscales consecutivos pueden conducir a la acumulación de deuda; esta, a su vez, puede agravar el déficit debido al costo del servicio (intereses) cuando el saldo pendiente es alto, comprometiendo la sostenibilidad fiscal. En contraste, las mejoras en el equilibrio fiscal a lo largo del tiempo son indicadores de buena salud. Las mismas pueden resultar de una combinación de un compromiso político con la disciplina fiscal, arreglos institucionales sólidos para el presupuesto y/o un desempeño favorable de la economía.

Los países de ALC reportaron un nivel de déficit promedio de 4,3% del PIB en 2018, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE, de 2,9% del PIB. En comparación con 2007, cuando era en promedio 0,9% del PIB, el déficit fiscal en los países de ALC aumentó en 3,4 puntos porcentuales, lo que representa un deterioro general de las perspectivas fiscales y económicas en la región. El mismo resulta de la combinación, en los últimos años, de un menor ingreso de *commodities* y un crecimiento económico lento, junto con la incertidumbre política en la región. En 2018, Jamaica (1,2%) y Honduras (0,2%) fueron los únicos países de ALC que reportaron un superávit fiscal. En los últimos dos años, el segundo ha realizado importantes esfuerzos para reducir sus desequilibrios e institucionalizar la prudencia macroeconómica (FMI, 2019). En contraste, los déficits fiscales del gobierno general fueron más altos en Bolivia (8,1%), Brasil (7,2%) y Surinam (7,2%). Dado el tamaño de su economía, lo que sucede en Brasil tiene consecuencias la región de ALC. La recesión que comenzó en 2015 ha demostrado la existencia de desequilibrios considerables en las cuentas fiscales, provocados por la necesidad de aumentar el gasto público, entre otros, para hacer frente al envejecimiento de la población, así como a los subsidios para empresas que han estado perdiendo competitividad (OCDE, 2018).

El balance primario es el saldo fiscal general, excluyendo los pagos de intereses netos sobre la deuda pública. Ilustra en qué medida los gobiernos pueden cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de mayor endeudamiento. En general, el balance primario es un indicador de gestión y de sostenibilidad de las finanzas públicas a corto plazo.

En 2018, del 4,3% del déficit del PIB en promedio en los países de ALC, casi el 3,8% del PIB representaba pagos de intereses netos, lo que resultó en un déficit primario promedio del 0,5% del PIB. Bolivia (7,0%) tuvo el mayor déficit en 2018, seguido de Surinam (3,6%) y Trinidad y Tobago (3,0%), mientras que algunos países caribeños obtuvieron los mayores superávits primarios: Jamaica (7,5%), Barbados (3,5%) y Belice (2,1%). Estos han implementado reformas de consolidación fiscal en los últimos años, ya que estaban muy endeudados y experimentaban un bajo crecimiento económico. A su vez, los pagos netos de intereses fueron

los más altos en Jamaica (6,3%), Brasil (5,6%), México (3,8%) y Barbados (3,8%).

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI (octubre de 2019), que se basa en el *Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Dichos marcos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos.

El saldo fiscal, también denominado capacidad de financiación (+) o necesidad de financiación (-) de la administración pública, resulta de sustraer los gastos totales de ingresos totales del gobierno. El balance fiscal indica si un gobierno está poniendo recursos financieros a disposición de otros sectores o está utilizando los generados por ellos. El balance primario es el saldo fiscal, excluyendo los pagos de intereses netos sobre pasivos del gobierno general (pagos menos cobros de intereses). Para el promedio de la OCDE, los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

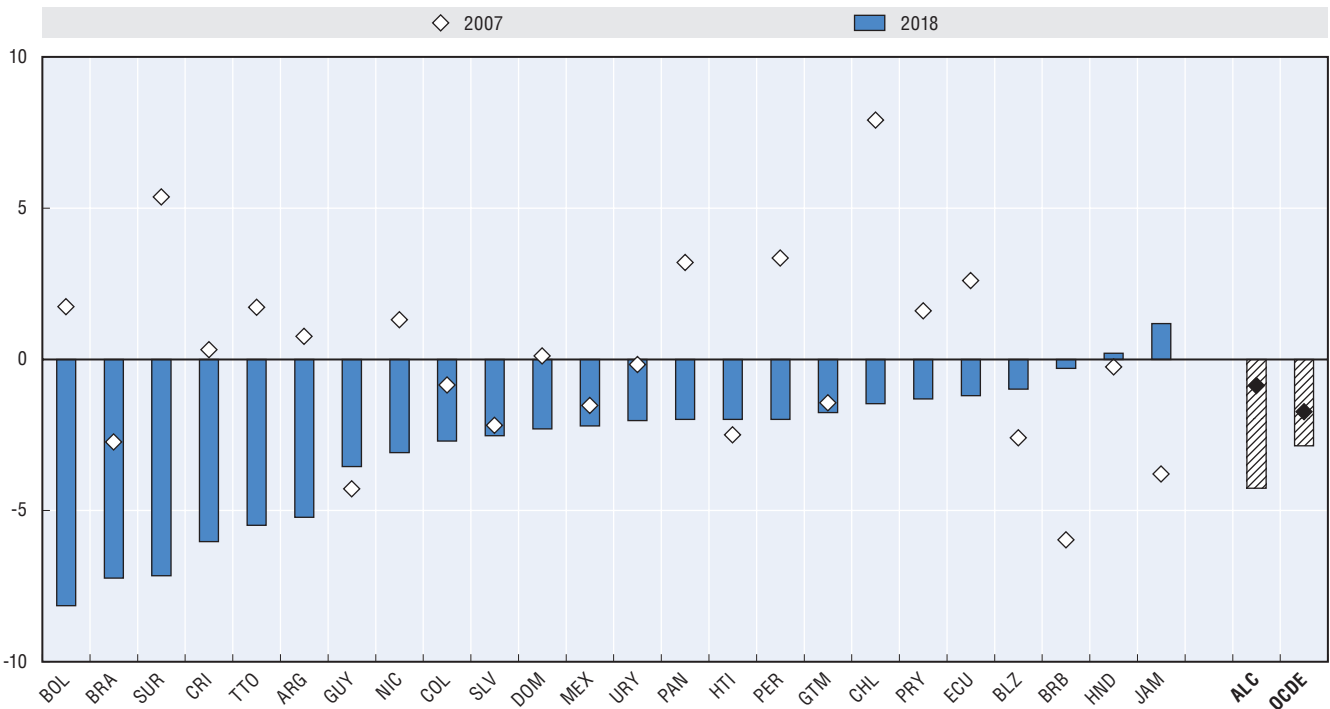
Bibliografía complementaria

- OCDE (2018), *OECD Economic Surveys: Brazil 2018*, Publicaciones de la OCDE, París. http://dx.doi.org/110.1787/eco_surveys-bra-2018-en
- Barreix, A. y L. Corrales (2019), *Reglas fiscales resilientes en América Latina*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC <http://dx.doi.org/110.18235/0002003>
- IMF (2019), "Staff Report for the 2019 article IV Honduras", Country Report No. 19/236, IMF Publishing, Washington D.C.

Notas para los gráficos

Los datos de Bolivia y Surinam para 2018 son estimaciones. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados. Para obtener más información sobre notas específicas por país (por ejemplo, cobertura de la administración pública), consulte: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>

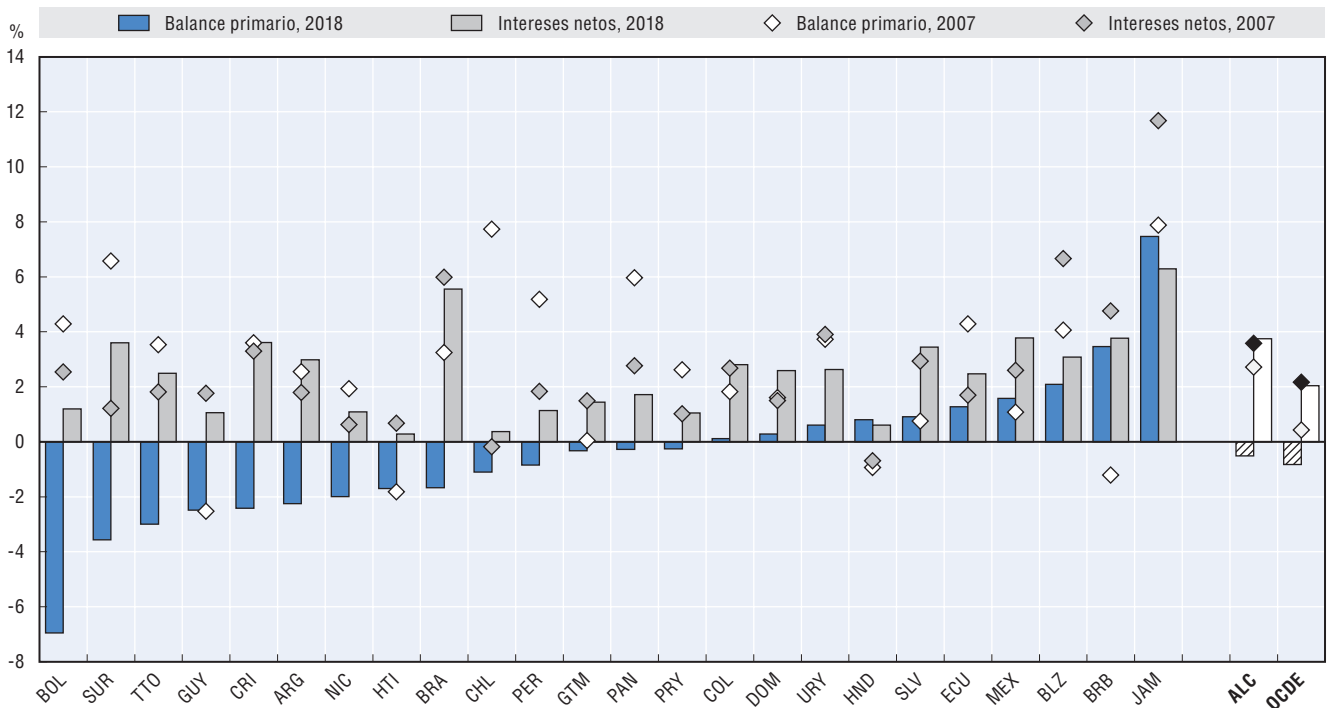
2.1. Balance fiscal de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: FMI, base de datos de World Economic Outlook (WEO, por sus siglas en inglés) (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094146>

2.2. Balance primario de la administración pública y gasto de intereses netos como porcentaje del PIB, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: FMI, base de datos de World Economic Outlook (WEO, por sus siglas en inglés) (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094146>

2.2. BALANCE ESTRUCTURAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los gastos e ingresos de la administración pública son muy sensibles a los ciclos económicos y eventos específicos (por ejemplo, privatizaciones). Los ingresos del gobierno (particularmente los tributarios) suelen disminuir durante las recesiones, mientras el gasto público puede aumentar al quedar más personas desempleadas y calificar para asistencia social o seguros de desempleo. Al contrario, durante los repuntes, mayores ingresos fiscales mejoran las cuentas públicas y la cantidad de beneficiarios de ayudas sociales tiende a disminuir. Analizar indicadores que no sufren de fluctuaciones temporarias ayuda a identificar la tendencia subyacente de las políticas fiscales relativas a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El balance fiscal estructural captura estas tendencias para evaluar el desempeño fiscal; su estimación requiere calcular los componentes estructurales y cíclicos tanto del balance fiscal como del producto o PIB potencial (a saber, la economía funcionando a plena capacidad).

El balance fiscal estructural para los países de ALC alcanzó un déficit promedio de 3,8% como parte del PIB potencial en 2018, aumentando en 2,3 puntos porcentuales desde 2007 cuando el déficit fue de 1,5%. Esta tendencia difiere de la de los países de la OCDE, en los que el déficit promedio como porcentaje del PIB fue del 3,1% en 2007 (antes de la crisis) y disminuyó en 0,4 puntos porcentuales para alcanzar el 2,7% en 2018. En 2018, los países de ALC con mayores déficits en tales términos fueron Surinam (6,4%) y Brasil (6,1%), aunque menores a sus déficits generales. Esto indica, por un lado, la necesidad de aumentar los ingresos, pero también que la información registrada está capturando efectos cíclicos negativos. Aunque en 2018 no se observaron excedentes estructurales en ningún país de ALC, Chile (1,5%), Paraguay (1,4%) y Barbados (0,3%) son los de menores déficits.

Las proyecciones del balance estructural como porcentaje del PIB en ALC indican que los déficits promedio disminuirán de un 3,7% proyectado en 2019 al 3,2% y 3,0% del PIB potencial en 2020 y 2021, respectivamente. Las mismas se enmarcan dentro de la expectativa de una recuperación – aunque todavía a tasas modestas – de crecimiento económico en los próximos años. Por el contrario, para los países de la OCDE, se espera que el déficit estructural aumente de un 3,1% proyectado para 2019 al 3,2% del PIB potencial en 2020 y 2021, reflejando las consecuencias de la guerra comercial entre economías desarrolladas y la incertidumbre respecto a, por ejemplo, los efectos económicos del Brexit.

Sin embargo, hay variaciones en las proyecciones para ALC para 2019, desde una caída de 9,1 p.p. y un 6,1 p.p. del PIB potencial en Surinam y Brasil respectivamente, a un aumento de 3,3 p.p. en Barbados. En Surinam, esto refleja las dificultades del gobierno para contener su gasto, incluidos los subsidios a las empresas estatales, así como los problemas para mejorar la recaudación impositiva. En Brasil, evidencia mayores incrementos en el gasto público en subsidios y transferencias sociales. Y en Barbados,

refleja los efectos de un conjunto de reformas ambiciosas, que incluyen un programa de consolidación fiscal y reestructuración de la deuda (Deyal, Alvarez, Waithe, 2019)

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI (octubre de 2019), que se basa en el *Manual de Estadísticas de Finanzas de Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Dichos marcos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos.

El balance fiscal estructural representa el saldo fiscal según lo reportado en el marco del SCN ajustado para el estado del ciclo económico (medido por la brecha del producto) y elementos no estructurales más allá del ciclo económico (por ejemplo, operaciones fiscales únicas). La brecha del producto mide la diferencia entre el PIB real y potencial, siendo este último una estimación del nivel del PIB si la economía funcionara a plena capacidad (no es directamente observable). Para el promedio de la OCDE, los datos provienen de la base de datos *Economic Outlook* No. 106 de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

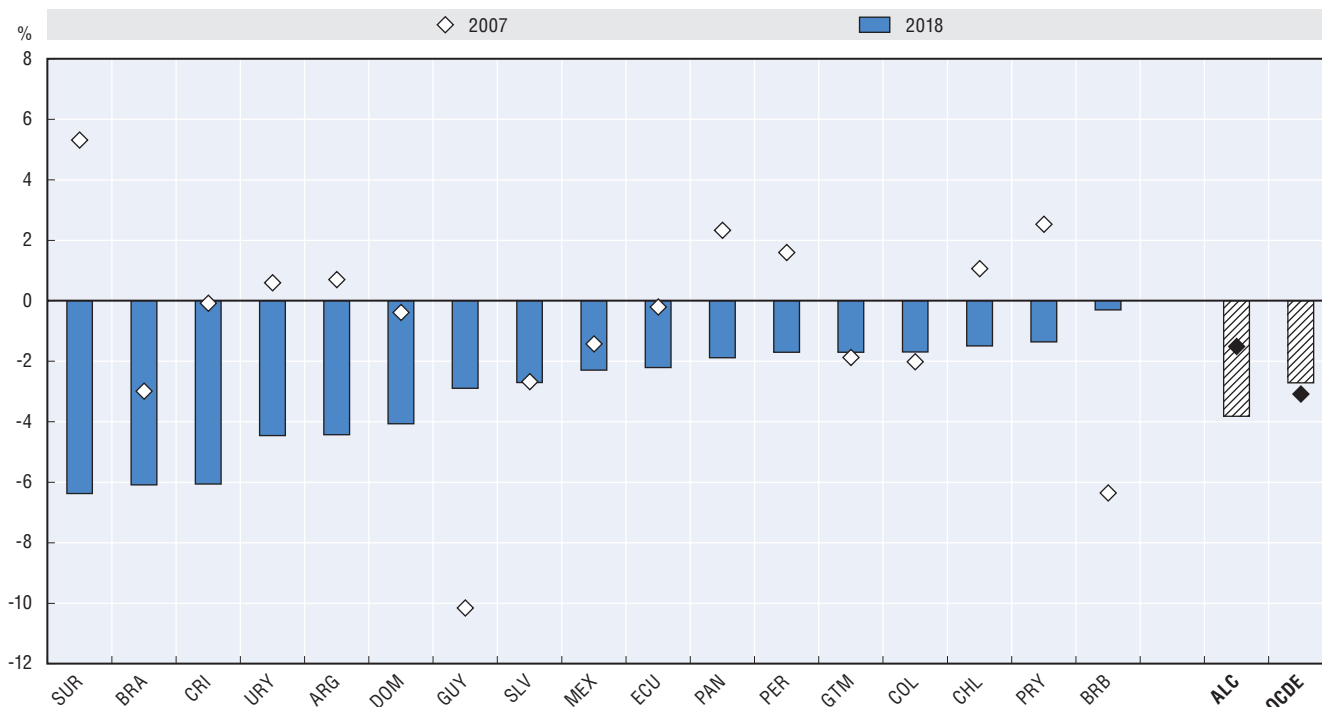
Bibliografía complementaria

- Ardanaz, M., et al. (2015), “Structural Fiscal Balances in Latin America and the Caribbean”, *IDB Working Paper Series* No. IDB-WP-579, Washington, DC. <https://publications.iadb.org/en/structural-fiscal-balances-latin-america-and-caribbean-new-dataset-and-estimations>.
- Deyal, Z., Álvarez, L. y Waithe, K. (2019), “Economic growth, debt and fiscal adjustment: Barbados’s tripartite challenge”, *IDB Policy Brief* No 310, IDB Publishing, Washington D.C, <http://dx.doi.org/110.18235/0001563>

Notas para los gráficos

Los datos de 2018 para Bolivia y Surinam son estimaciones. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados. Para obtener más información sobre notas específicas por país (por ejemplo, cobertura de la administración pública), consulte: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>

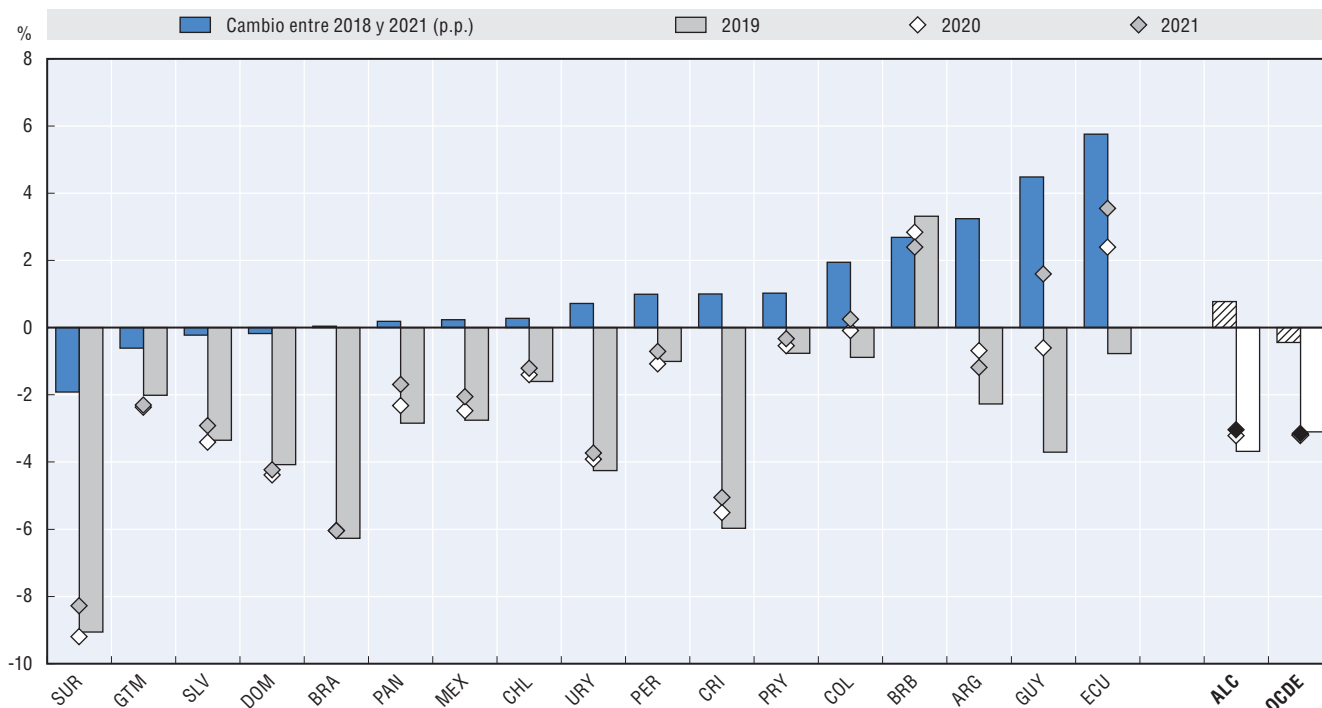
2.3. Balance estructural de la administración pública como porcentaje del PIB potencial, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: OECD Economic Outlook N.106 (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094184>

2.4 Balance estructural proyectado por la administración pública como porcentaje del PIB potencial en 2019, 2020 y 2021 y cambio desde 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: OECD Economic Outlook N.106 (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094203>

2.3. DEUDA BRUTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La deuda bruta representa las obligaciones pendientes del gobierno derivadas de la necesidad de financiar déficits mediante préstamos. Los gobiernos acumulan deuda para financiar gastos por encima de sus ingresos, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura que fomente el crecimiento económico a largo plazo. Las fluctuaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés pueden impactar sobre la deuda cuando esta está valuada en moneda extranjera (como es el caso en varios países de ALC), creando vulnerabilidad externa.

En 2018, el nivel promedio de deuda en los países de ALC alcanzó el 64,7% del PIB. Entre 2007 y 2018, la deuda aumentó en 17,2 p.p., lo que resulta relativamente bajo al compararla con los países de la OCDE donde aumentó 35,5 p.p. en el mismo período. A pesar de que su deuda es la tercera más alta de la región (94,3% del PIB), Jamaica obtuvo la mayor disminución (20,1 p.p.) en 11 años, ayudado por un programa del FMI para la recuperación fiscal además de un conjunto de reformas en la materia. Además, Panamá (9,7 p.p.), Guyana (8,0 p.p.) y Perú (5,7 p.p.) lograron disminuir sus deudas en el mismo período.

Por el contrario, durante el período 2007-2018, Surinam (55,3 p.p.), Barbados (48,3 p.p.), Trinidad y Tobago (28,8 p.p.) y Costa Rica (26,5 p.p.) aumentaron su deuda. En Surinam, podría explicarse por su dependencia de la industria minera y su vulnerabilidad a los cambios en los precios de tales productos. La caída en los precios internacionales de los commodities y el cese de la extracción de alúmina redujeron significativamente los ingresos del gobierno y el crecimiento del PIB durante los últimos años. En respuesta, el gobierno estableció un fondo de estabilización en 2017, devaluó altamente la moneda local y tomó deuda para financiar el gasto público (FMI, 2018).

Entre 2007 y 2018, la tasa de crecimiento promedio anual de la deuda pública real per cápita en los países de ALC fue de 3,9%, alcanzando un promedio de USD 10.656 PPA per cápita en 2018. En los países de la OCDE el crecimiento fue mayor (4,6%), alcanzando un promedio de USD 55.219 PPA per cápita en 2018. Durante el período en cuestión, Chile aumentó fuertemente su deuda per cápita (21 p.p.) y Jamaica fue el único país de ALC en disminuirla (-2,2 p.p.), ver gráfico en línea. Se estima que la deuda en la región de ALC continuará aumentando en el futuro próximo para contrarrestar la estabilización de los precios de los commodities en niveles relativamente bajos, un crecimiento económico más lento y mayores expectativas y demandas de población de más bienes y servicios públicos, entre otros.

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI (octubre de 2019), que se basa en el *Manual de Estadísticas de Finanzas de Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Empero, existen algunas diferencias entre ambos en varios casos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Tales marcos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos.

Deuda son todos los pasivos que requieren pago(s) de intereses o capital por parte del deudor al acreedor fechas futuras. Todos los instrumentos de deuda son pasivos, pero algunos de ellos (por ejemplo, acciones, patrimonio y derivados financieros) no son deuda. El tratamiento de las obligaciones del gobierno respecto a sus esquemas de pensiones para empleados varía de un país a otro, lo que dificulta la comparabilidad internacional. Bajo MEFP, la parte no financiada de los esquemas de jubilación del gobierno se incluye en la deuda. En el SCN 1993, solo el componente financiado de los planes de pensiones de los empleados del gobierno se reflejaba en sus pasivos, sin embargo, el SCN 2008 reconoce la importancia de las responsabilidades de los planes de pensiones de los empleadores, independientemente de si están financiados o no. Para las pensiones proporcionadas por el gobierno a sus empleados, se permite cierta flexibilidad en el registro de pasivos no financiados en las cuentas principales. Para más información sobre el cálculo de la deuda pública per cápita consultar “ingresos de la administración pública” (sección de metodología y definiciones). Para el promedio de la OCDE, los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, la cual está basada en el marco del SCN.

Bibliografía complementaria

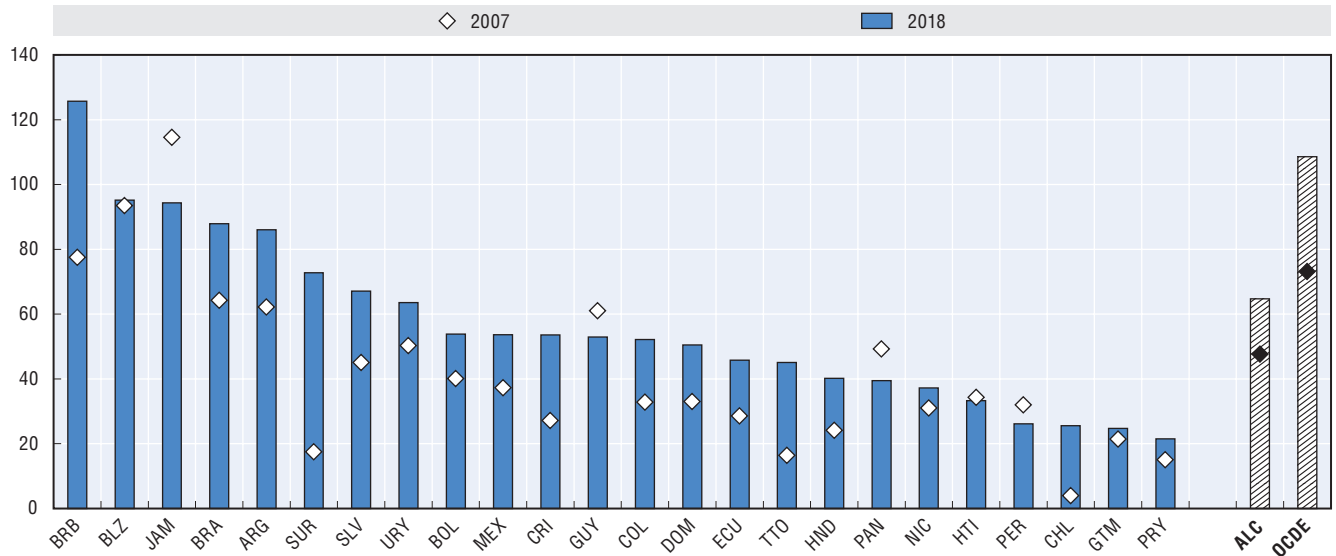
- IMF (2018), “Suriname: 2018 Article IV Consultation - Staff Report”, *IMF Country Report No. 18/376*, International Monetary Fund, Washington, DC.
- OCDE et al. (2019), *Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición*, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/110.1787/g2g9ff1a-es>

Notas para los gráficos

Los datos de Bolivia y Surinam para 2018 son estimaciones. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados. Para obtener más información sobre notas específicas por país, puede consultar: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>

El gráfico 2.7 (Tasa de crecimiento promedio anual de la deuda bruta real per cápita de la administración pública, 2007-18) está disponible en línea en el Anexo F.

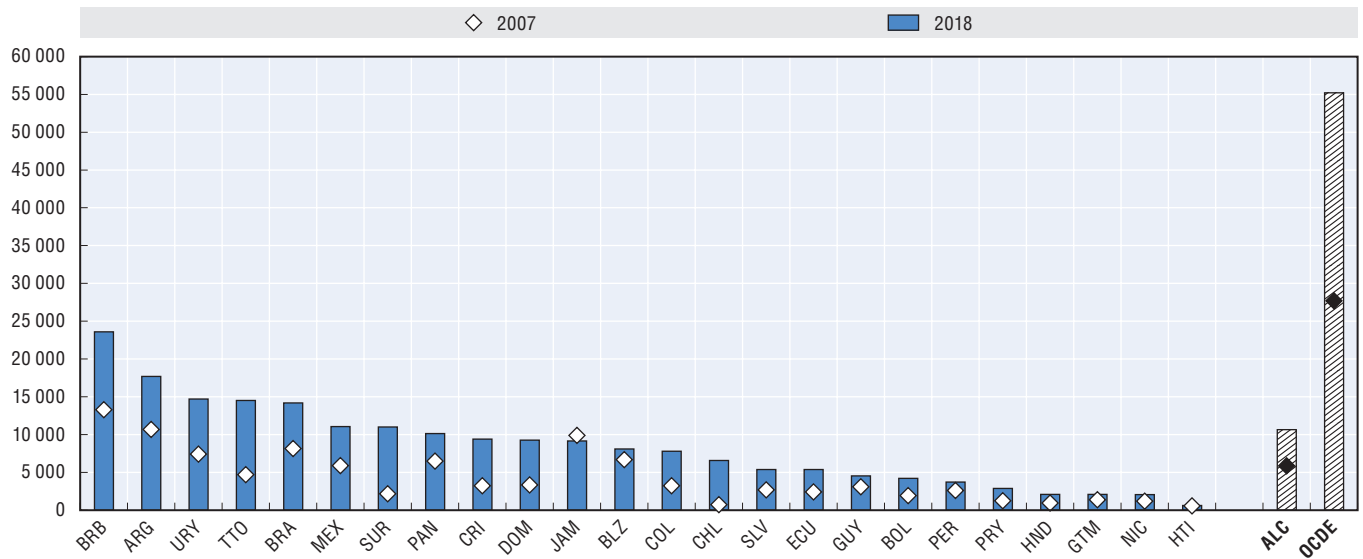
2.5. Deuda bruta de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: OECD Economic Outlook N.106 (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094222>

2.6. Deuda bruta de la administración pública per cápita, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: OECD Economic Outlook N.106 (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094241>

2.4. INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los gobiernos obtienen ingresos (mediante impuestos, regalías, derechos de aduana, etc.) para financiar la provisión de bienes y servicios y la redistribución (por ejemplo, mediante beneficios sociales y subsidios). El monto recaudado depende de factores como las políticas fiscales, el tipo de modelo de desarrollo, la dotación de recursos naturales, las instituciones políticas, la etapa de desarrollo socioeconómico y las condiciones macroeconómicas internas y externas.

En los países de ALC, los ingresos de la administración pública representaron en promedio el 26,9% del PIB en 2018, 1,3 puntos porcentuales por debajo del valor de 2007. El PIB ha aumentado más rápido que los ingresos (que han crecido en términos absolutos y per cápita), lo que explica por qué la proporción ingreso total/PIB se contrajo durante este período. Esta tendencia contrasta con la OCDE, donde los ingresos alcanzaron el 37,5% del PIB en 2018 y aumentaron aproximadamente 0,2 p.p. desde 2007. Los países de ALC con el mayor porcentaje de ingresos en relación al PIB son Ecuador (35,8%), Argentina (33,6 %) y Brasil (31,2%). Por el contrario, la República Dominicana (14,1%), Costa Rica (13,6%) y Guatemala (10,6%) tienen la menor recaudación.

Entre 2007 y 2018, los ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB de Ecuador (9,13 p.p.) tuvieron el mayor crecimiento. Existen múltiples explicaciones, como el reciente repunte en el precio de los hidrocarburos, y factores estructurales, por ejemplo las reformas al sistema tributario: en 2008 se incrementó el gravamen sobre ingresos y herencias, y se introdujeron nuevos impuestos (por ejemplo, a la salida de divisas). Además, los esfuerzos para modernizar la administración tributaria y reducir la evasión fiscal han logrado aumentar el número de contribuyentes. Los ingresos de Panamá sufrieron la mayor contracción (6,1 p.p.), lo que puede deberse a las numerosas exenciones e incentivos fiscales y el bajo rendimiento en la recaudación de impuestos; lo que reflejaría debilidades estructurales en la administración aduanera y tributaria (FMI, 2019).

Otra forma de estimar el peso del gobierno en la economía es medir los ingresos del gobierno per cápita. En promedio, estos han llegado a USD 4.437 PPA en 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE, de alrededor de USD 17.865 PPA. Las islas caribeñas de habla inglesa (Barbados y Trinidad y Tobago) y los países del cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) son los de mayor recaudación. En promedio, los ingresos per cápita aumentaron a una tasa anual del 0,6% en ALC en comparación con 0,8% en la OCDE. El PIB ha crecido más rápido que los ingresos, lo que explica la contracción de la proporción ingreso total/PIB durante el período. Trinidad y Tobago sufrió la mayor contracción en su tasa de crecimiento promedio anual (1,9%), explicada por varios años de crecimiento débil o contracción y su fuerte dependencia de los hidrocarburos, los cuales recientemente sufrieron fluctuaciones negativas en precios y producción (OCDE, 2019).

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI (octubre de 2019), que se basa en el *Manual de Estadísticas de Finanzas de Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema General de Cuentas Nacionales (SCN). Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia. Dichos marcos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos.

La administración pública está compuesta por el gobierno central, el estatal, el local y los fondos de la seguridad social. Los ingresos incluyen impuestos, contribuciones sociales netas y subvenciones y entre otros. Los ingresos del gobierno per cápita se calcularon convirtiendo los ingresos totales a USD, utilizando las tasas de conversión de paridades de poder adquisitivo (PPA) del FMI y dividiéndolas por el tamaño de la población. PPA es el número de unidades de la moneda del país B necesarias para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en el país A. El producto interno bruto (PIB) es la medida estándar del valor de los bienes y servicios producidos por un país durante un período. Para el promedio de la OCDE, los datos se derivan de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

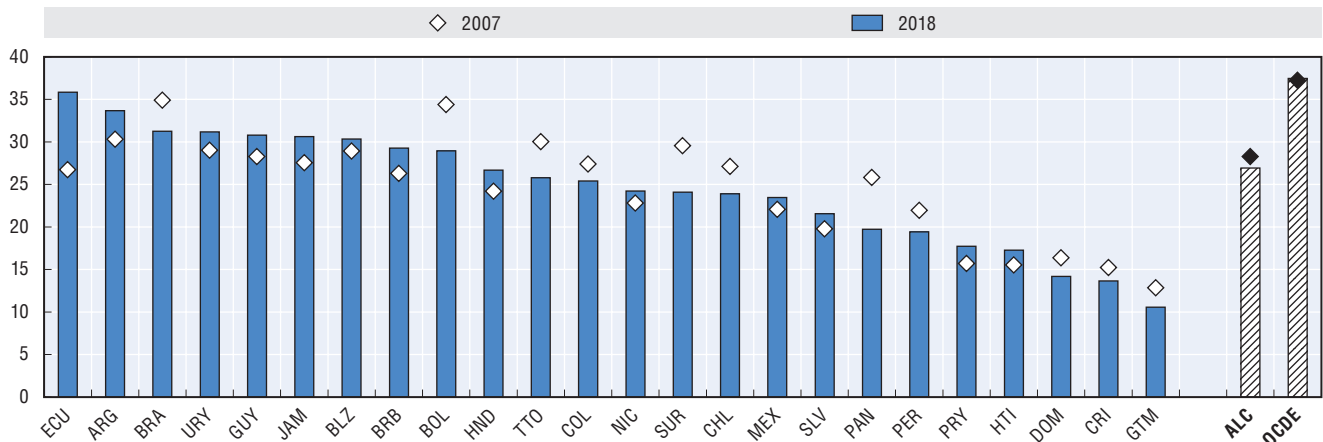
Bibliografía complementaria

- IMF (2019), "Staff report for the 2019 Article IV consultation", *IMF Country report* No 19/11, Publicaciones del FMI, Washington D.C., <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/17/Panama-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-46528>
- OCDE et al. (2019), *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2019*, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es>

Notas para los gráficos

Los datos de 2018 para Bolivia y Surinam son estimaciones. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados. Para obtener más información sobre notas específicas por país (por ejemplo, cobertura de la administración pública), puede consultar: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index>.

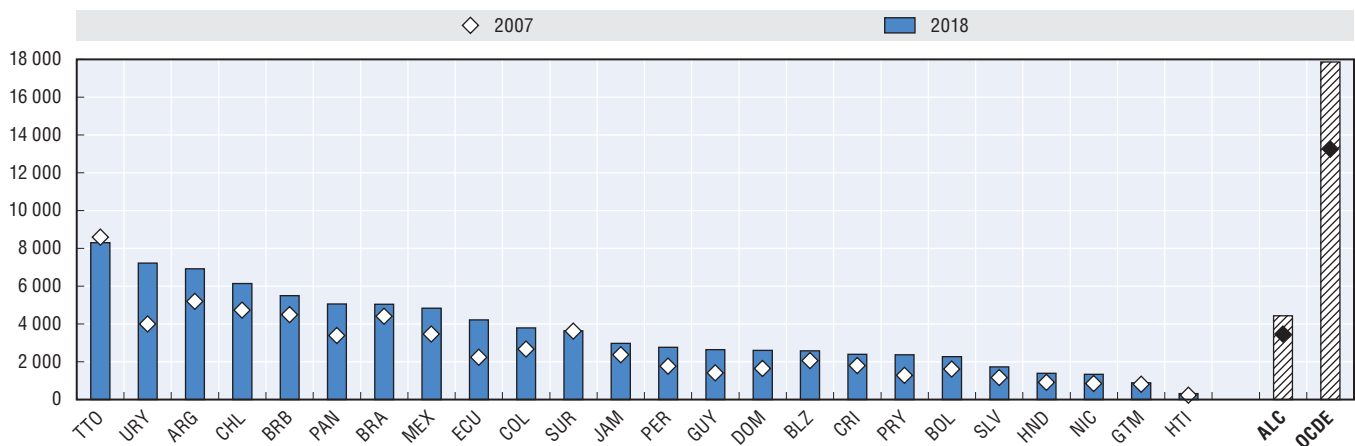
2.8. Ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094260>

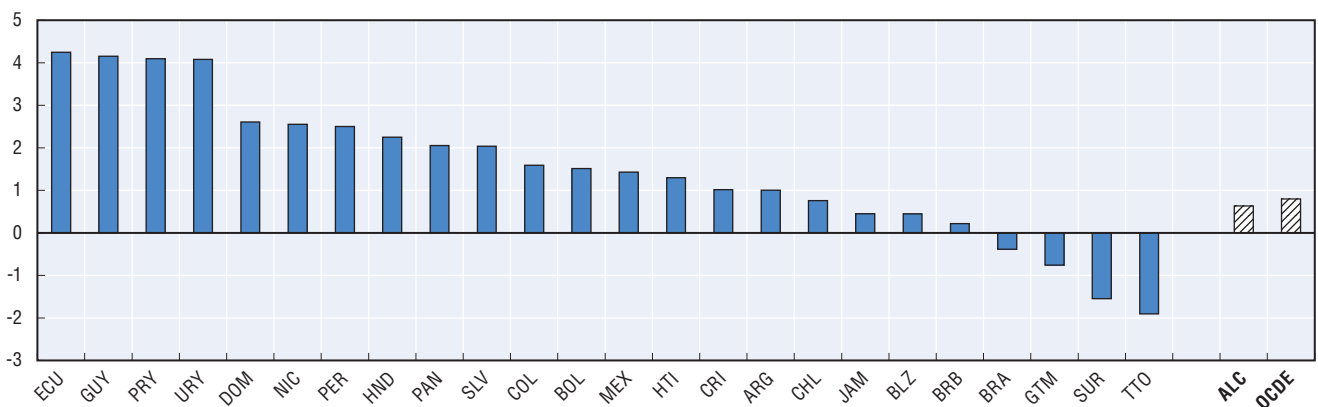
2.9. Ingresos de la administración pública per cápita, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094279>

2.10. Tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos reales de gobierno per cápita, 2007-18



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094298>

2.5. INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La facultad de gravar a los ciudadanos es uno de los atributos fundacionales y fundamentales de los gobiernos. La recaudación tributaria representa la fuente más importante de fondos públicos en casi todos los países y es crucial para proporcionar bienes y servicios públicos, garantizar las operaciones del gobierno, realizar inversiones públicas y realizar una mayor o menor redistribución de ingresos. Como tendencia general, en 2017 los ingresos tributarios como porcentaje del PIB fueron en promedio del 22% en ALC. Esto representa un aumento de 1,8 p.p. respecto de 2007, aunque la recaudación aún está por debajo del promedio de la OCDE de 34,1% en 2017. Sin embargo, el incremento ha sido menor en estos países que en ALC (0,5 p.p. en promedio), por lo que la brecha se está reduciendo.

Brasil (32,3%), Barbados (31,8%), Uruguay (30,8%) y Argentina (30,3%) son los países de ALC donde los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son más altos. República Dominicana (13,8%), Paraguay (13,8%) y Guatemala (12,4%) tienen la recaudación más baja. Los mayores aumentos entre 2007 y 2017 se produjeron en Ecuador (6,7 p.p.) y Uruguay (5,8 p.p.), permeados por la recuperación económica general en la región en 2017 luego de una recesión de dos años.

Ecuador realizó reformas durante la última década, por las que se aumentaron las tasas de varios impuestos (ingresos y herencias), y se modernizó la administración tributaria. En el caso de Uruguay, en 2007, se simplificó el sistema tributario bajo el lema “los que tienen más pagarán más”, pasando de un esquema universal a uno progresivo en el cual se gravan los salarios, e impuso el requisito de presentar una declaración jurada de renta personal. La reforma ha resultado en un aumento general de los ingresos tributarios, aunque con pequeñas fluctuaciones debido al ciclo económico. Por el contrario, los ingresos tributarios sufrieron la mayor contracción en Perú (3 p.p.) entre 2007 y 2017, en gran medida debido a la fuerte disminución en el precio de los minerales y la correspondiente caída de los ingresos tributarios desde 2014.

La estructura impositiva en los países de ALC y la OCDE en 2017 fue diferente. En ALC, los impuestos sobre bienes y servicios (por ejemplo, IVA), que tienden a ser regresivos, representan aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios en comparación con aproximadamente un tercio en la OCDE. En el mismo año, en promedio en ALC, el 44,3% de la recaudación provino de impuestos a los ingresos y las ganancias y de las contribuciones a la seguridad social, en comparación con el 59,8% en los países de la OCDE. A su vez, dentro de los impuestos a los ingresos y las ganancias, la participación del gravamen a la renta de las empresas fue mayor y la de las personas físicas fue menor en ALC que en la OCDE (OCDE, 2019).

Entre 2007 y 2017, en promedio, el cambio más importante en la estructura de los ingresos tributarios fue el aumento del peso relativo de las contribuciones sociales (del 14,4% al 17%). Algunos países han logrado una distribución más equilibrada entre impuestos indirectos (por ej., IVA) y

directos (por ej., ingresos), por ejemplo, Uruguay (reducción de 18 puntos porcentuales en la importancia relativa de los impuestos sobre bienes y servicios) y Costa Rica (10,5 p.p.). El peso relativo de los impuestos indirectos ha aumentado en nueve países de ALC (Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Guyana, Jamaica, México, Perú y Trinidad y Tobago), por lo que, en la región, en promedio, la reducción ha bastante modesta (1 p.p.).

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Ingresos de la OCDE en América Latina, cuya clasificación de ingresos tributarios es casi idéntica a la del *Manual de Estadísticas de Finanzas de Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política tributaria. Está armonizado con otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema General de Cuentas Nacionales (SCN). Ambos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las definiciones de ingresos tributarios utilizadas en la base de datos de Estadísticas de Ingresos de la OCDE en América Latina y el SCN. En el SCN, los impuestos son pagos obligatorios, en efectivo o en especie, realizados por unidades institucionales al gobierno general. Las contribuciones sociales son pagos reales o imputados a planes de seguro social para prever prestaciones de seguro social que pueden ser obligatorias o voluntarias. La base de datos de Estadísticas de Ingresos de la OCDE en América Latina trata las contribuciones obligatorias de la seguridad social como impuestos, mientras que el SCN las considera contribuciones sociales porque la recepción del beneficio de la seguridad social depende, en la mayoría de los países, de que se hayan realizado las contribuciones apropiadas.

Bibliografía complementaria

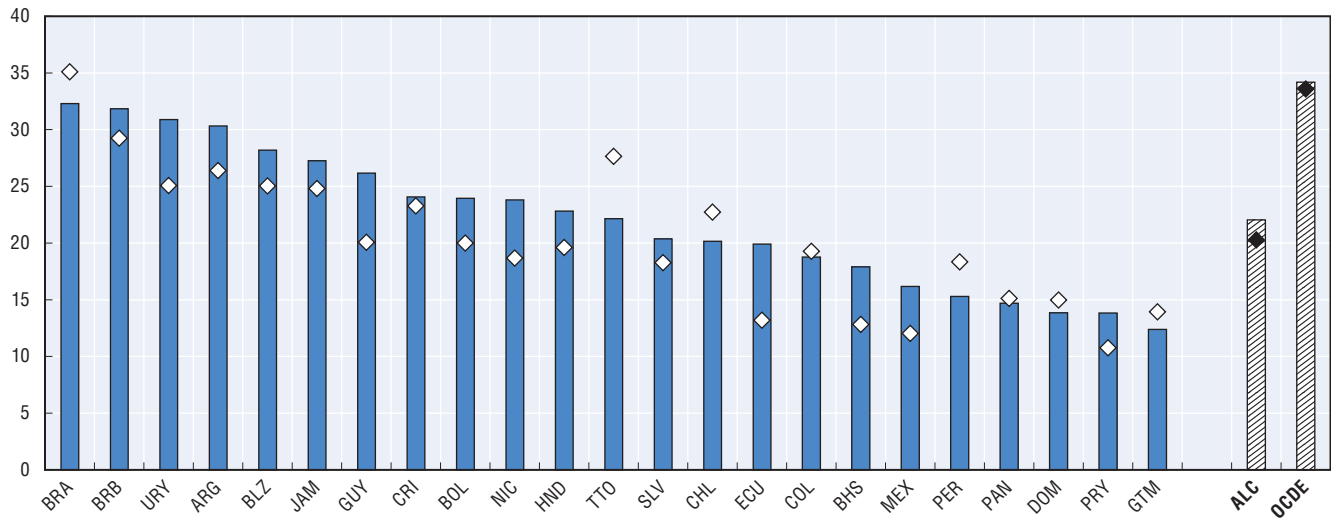
- OCDE et al. (2019), *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2019*, Publicaciones de la OCDE, París, <https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es>
- CEPAL (2019), *Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, <https://www.cepal.org/en/publications/44517-fiscal-panorama-latin-america-and-caribbean-2019-tax-policies-resource>.

Notas para los gráficos

Los promedios de ALC y la OCDE no están ponderados.

2.12 El promedio de la OCDE se refiere a 2016 en lugar de 2017.

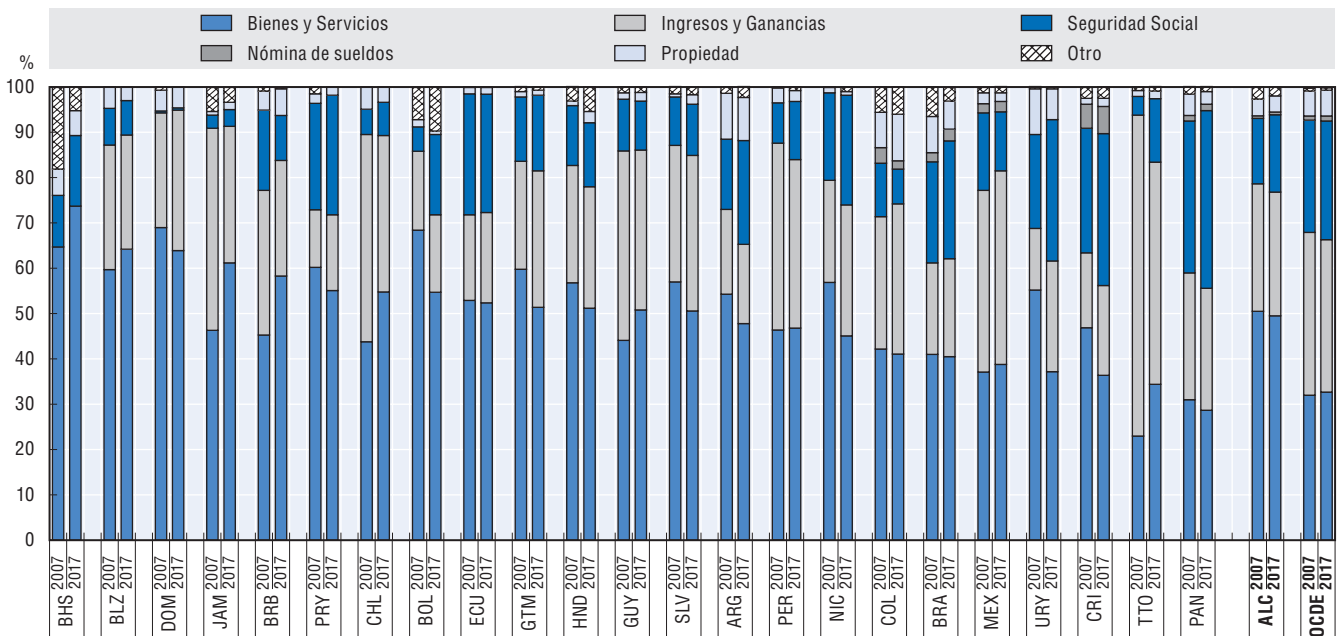
2.11. Ingresos tributarios del gobierno como porcentaje del PIB, 2007 y 2017



Fuente: OCDE (2019) Estadísticas de Ingresos en América Latina y el Caribe (base de datos)

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094317>

2.12. Desglose de los ingresos tributarios como porcentaje del total de impuestos, 2007 y 2017



Fuente: OCDE (2019) Estadísticas de Ingresos en América Latina y el Caribe (base de datos)

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094336>

2.6. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los gobiernos gastan dinero en proporcionar bienes y servicios a la población, siendo algunos de competencia exclusiva (por ejemplo, administrar justicia), y en la redistribución de ingresos (por ejemplo, a través de beneficios sociales y subsidios). Los gastos, suelen ser menos flexibles que los ingresos, ya que son menos sensibles al ciclo económico y reflejan decisiones políticas pasadas y actuales que garantizan derechos.

En 2018, los gobiernos en ALC gastaron en promedio el 31,2% del PIB, lo que representa un aumento de 2 p.p. desde 2007. Aunque estos gastaron notablemente menos que los países de la OCDE –cuyos gastos alcanzaron el 40,3% del PIB en promedio en 2017–, tuvieron un mayor incremento en el período bajo análisis (los de la OCDE gastaron 1,3 p.p. más que en 2007). Esto se debe al aumento de los gastos en la mayoría de los países, algunos de ellos cuyos ingresos disminuyeron en el mismo período, como Bolivia, Chile, Costa Rica y Perú (ver sección 2.4). Varios países de ALC establecieron nuevas políticas de bienestar (por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas, subsidios) en un período de tasas de crecimiento económico relativamente altas y altos precios de las materias primas, cuya continuidad podría peligrar dado al bajo crecimiento económico actual.

Existen grandes variaciones entre los países de ALC en términos de gastos. Por ejemplo, Argentina (38,9% del PIB), Brasil (38,5%), Bolivia y Ecuador (37,1% cada uno) tienen los más altos y están más cerca del promedio de la OCDE. Por el contrario, Guatemala (12,3%) y República Dominicana (16,5%) gastan alrededor de la mitad del promedio de ALC.

En comparación con 2007, los gastos aumentaron más en Ecuador (12,9 p.p.), Argentina (9,4 p.p.) y Surinam (7,1 p.p.). En el último, el aumento se debe al tamaño y crecimiento del empleo público, y los subsidios a la electricidad y al combustible, entre otros (Stone et al., 2016). Por el contrario, Barbados (-2,7 p.p.), Guatemala (-2,0 p.p.) y Jamaica (-1,9 p.p.) son los que más disminuyeron sus gastos, debido a los altos niveles de deuda o al lento crecimiento económico.

Los gastos per cápita proporcionan una forma alternativa de interpretar los gastos del gobierno. Los países de ALC gastaron, en promedio, USD 5.138 PPA per cápita en 2017. Los gastos de ALC representan alrededor de una cuarta parte de los de la OCDE (USD 19.441 PPA en promedio). Trinidad y Tobago es el país que más gasta (USD 10.071 PPA), seguido de Argentina (USD 7.993 PPA) y Uruguay (USD 7.690 PPA), mientras que Guatemala (USD 1.041 PPA) y Haití (USD 359 PPA) son los que menos gastaron en la región.

Entre 2007 y 2018, el crecimiento real anual promedio del gasto de la administración pública per capita fue de 1,7 cada año entre los países de ALC, comparado 1,1 en los de la OCDE. Ecuador, Paraguay y Perú fueron los que más incrementaron sus gastos reales per cápita desde 2007 (5% o más), mientras que Barbados y Jamaica experimentaron reducciones de al menos 1% por año en el mismo período.

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del FMI (octubre de 2019), que se basa en el *Manual de Estadísticas de Finanzas de Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y valorar la política fiscal. Está armonizado con los otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos en varios casos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Los marcos del MEFP y el SCN se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos. La administración pública consiste en el gobierno central, el gobierno estatal, el gobierno local y los fondos de seguridad social.

Los gastos abarcan el consumo intermedio, la compensación de los empleados, los subsidios, las rentas de propiedad (incluidos los gastos por intereses), los beneficios sociales, las subvenciones y otros gastos, y las inversiones. Por lo tanto, la totalidad del gasto consiste en gastos totales y la adquisición neta de activos no financieros. El producto interno bruto (PIB) es la medida estándar del valor de los bienes y servicios producidos por un país durante un período.

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es la cantidad de unidades de moneda del país B necesarias para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en el país A. Para obtener información sobre el cálculo de los gastos gubernamentales per cápita, consulte la metodología y definiciones de la sección 2.4. Para el promedio de la OCDE, los datos se derivan de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

Bibliografía complementaria

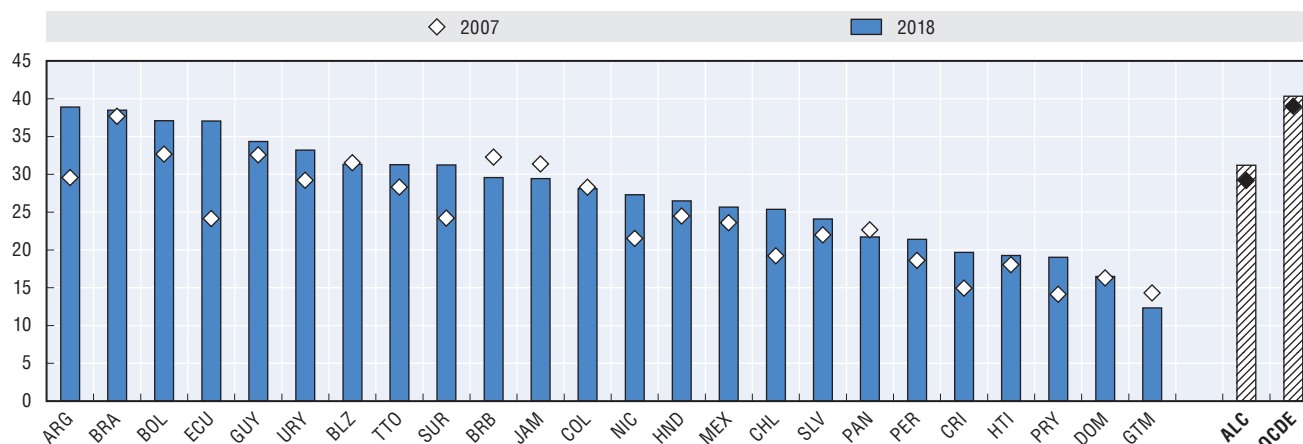
- Cavallo, E. y Powell, A. (2019) *Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Country-Program-Evaluation-Suriname-2011-2015.pdf>.
- Stone et al. (2016). *Evaluación del Programa de País: Surinam 2011-2015*. Oficina de Evaluación y Supervisión, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC

Notas para los gráficos

Los datos de 2018 para Bolivia y Surinam son estimaciones. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados.

Para obtener más información sobre notas específicas por país (por ejemplo, cobertura de la administración pública), puede consultar: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx>

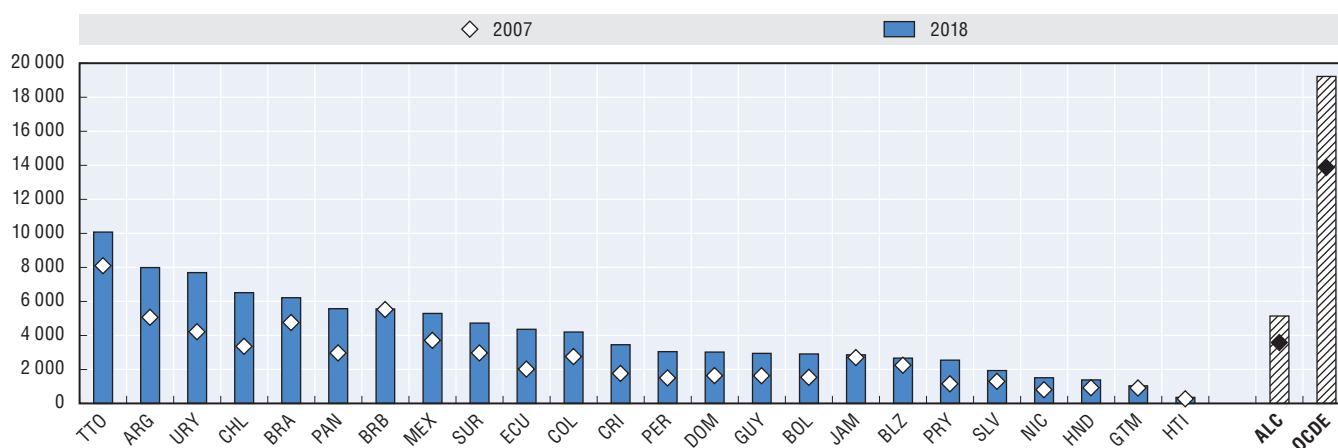
2.13. Gastos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094355>

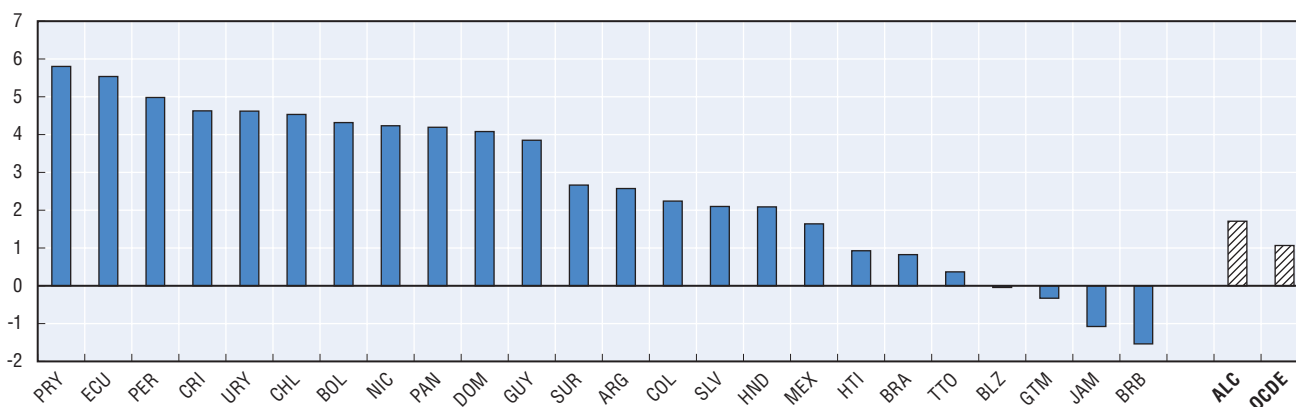
2.14. Gastos de la administración pública per cápita, 2007 y 2018



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094374>

2.15. Tasa de crecimiento promedio anual del gasto público real per cápita, 2007-18



Fuentes: Datos para los países de ALC: base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI (octubre de 2019). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094393>

2.7. ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS POR NIVEL DE GOBIERNO

En general, los gobiernos subcentrales son responsables de prestar servicios a la población. Sus facultades recaudatorias dependen del grado de federalismo fiscal. En los países donde los niveles subcentrales tienen escasas facultades, su principal fuente de ingresos son las transferencias del gobierno central, que se destinan principalmente a ejecutar el presupuesto central.

Investigaciones recientes muestran que, descentralizar el gasto y la recaudación en la misma medida, contribuye al crecimiento económico y a la eficiencia del gasto, especialmente en economías altamente integradas a los mercados globales (Kim y Dougherty, 2018). Sin embargo, los países de ALC han sufrido tradicionalmente un desequilibrio entre ambos en niveles subcentrales del gobierno, porque los niveles locales y estatales dependen de las transferencias del gobierno central (Cibils y Ter-Minassian, 2015), y por ende tienen autonomía limitada en sus finanzas.

Entre los países de ALC con datos disponibles en 2017, el nivel central generó el 69,7% de los ingresos, el nivel estatal contribuyó con el 19,1% y el gobierno local con el 10,4%. Esto muestra una mayor descentralización que en 2007, cuando el nivel central recaudó el 70,7% de los ingresos; el estatal, el 21,2% y el local, el 7,5%. En los países de la OCDE, el nivel estatal recaudó el 19,2% de los ingresos y el local contribuyó con el 10,2% en 2017.

Existen diferencias en la descentralización de la recaudación de ingresos entre los países de ALC. En Chile, en 2017, el gobierno central recaudó el 91,9% y el local solo el 8,1%. Los gobiernos regionales en Chile son “entidades mixtas” (tanto descentralizadas como desconcentradas) y las únicas entidades autónomas son los municipios (que administran las *comunas*), aunque su dependencia de transferencias los convierte en proveedores de servicios públicos (OCDE, 2017). Por el contrario, en Brasil, un país federal, el gobierno central contribuyó con 65,5%, el nivel estatal 24,0% y el local 10,4%.

En ALC, el gasto está más descentralizado que la recaudación. En 2017, los niveles locales gastaron en promedio el 18% del total. Por el contrario, el nivel central gastó 62,7% y el estatal 18,5%. El desequilibrio es más evidente en México, donde el gobierno central gastó 38,6% y el nivel estatal 35,0%, aunque el primero recaudó el 80,5% y el segundo solo el 7,2%.

Del mismo modo, en Perú, el gobierno central recaudó el 82,6% y gastó el 53,3% del total. El nivel estatal recaudó el 0,7% y gastó el 19,1%, y el local el 4,5% y el 15,9% respectivamente. Tal desequilibrio se debe a la dependencia de las industrias extractivas (cuyos ingresos se comparten), la falta de fuentes de ingresos a nivel regional (por ejemplo, impuestos específicos) y la falta de autonomía en la definición de los impuestos municipales (Cibils y Ter-Minassian, 2015)

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI, que aplica los conceptos establecidos en el *Manual de Estadísticas de Finanzas del Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con los otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Existen algunas diferencias entre los marcos del MEFP y el SNC en varios casos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Dichos marcos se han revisado recientemente y los países han implementado varios estándares estadísticos.

La administración pública está compuesta por el gobierno central, estatal y local y fondos de la seguridad social. El gobierno estatal rige en los estados federales de Brasil y México y en los países altamente descentralizados de Colombia, Paraguay y Perú. Para obtener información detallada sobre los componentes de ingresos y gastos, consulte las secciones de metodología y definiciones de las secciones 2.4 y 2.6. Los datos excluyen las transferencias entre niveles de gobierno para ver la contribución de cada subsector en los ingresos/gastos totales de la administración pública, que a este nivel se consolidan. Para el promedio de la OCDE, los datos se derivan de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

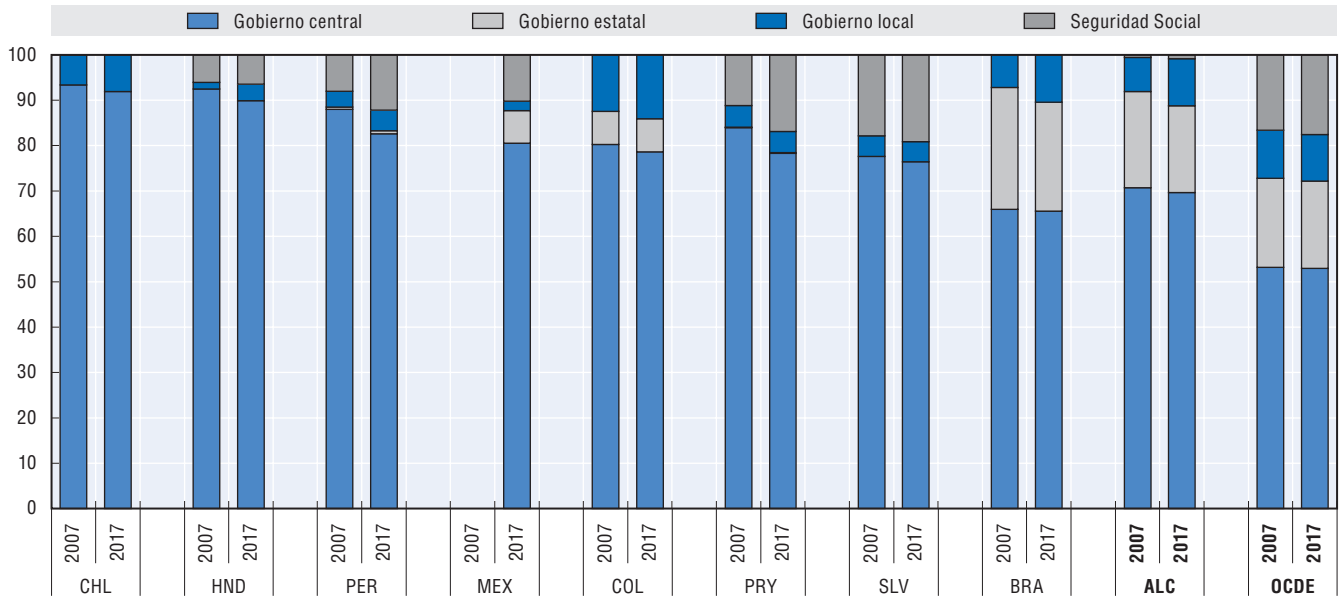
Bibliografía complementaria

- Cibils, F. y Ter-Minassian, T. (eds.) (2015) *Decentralizing Revenue in Latin America: Why and How*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.
- Kim, J. y S. Dougherty (eds.) (2018), *Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth*, OECD Fiscal Federalism Studies, Publicaciones de la OCDE, París/KIPF, Seoul. <https://doi.org/110.1787/9789264302488-en>.
- OCDE (2017), *Making Decentralisation Work in Chile: Towards Stronger Municipalities*, OECD Multi-level Governance Studies, Publicaciones de la OCDE, París. <http://dx.doi.org/110.1787/9789264279049-en>

Notas para los gráficos

- Los datos de México, Perú y Paraguay se registran sobre una base en efectivo.
- Se excluyen las transferencias entre niveles de gobierno. Los datos de México no están incluidos en el promedio de ALC. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados.
- Los datos de Honduras se refieren a 2015 en lugar de 2017 y los datos de Paraguay se refieren a 2016 en lugar de 2017. y los de Colombia se refieren a 2008 en lugar de 2007.
- Los fondos de seguridad social están incluidos en el gobierno central de Brasil, Chile y Colombia.

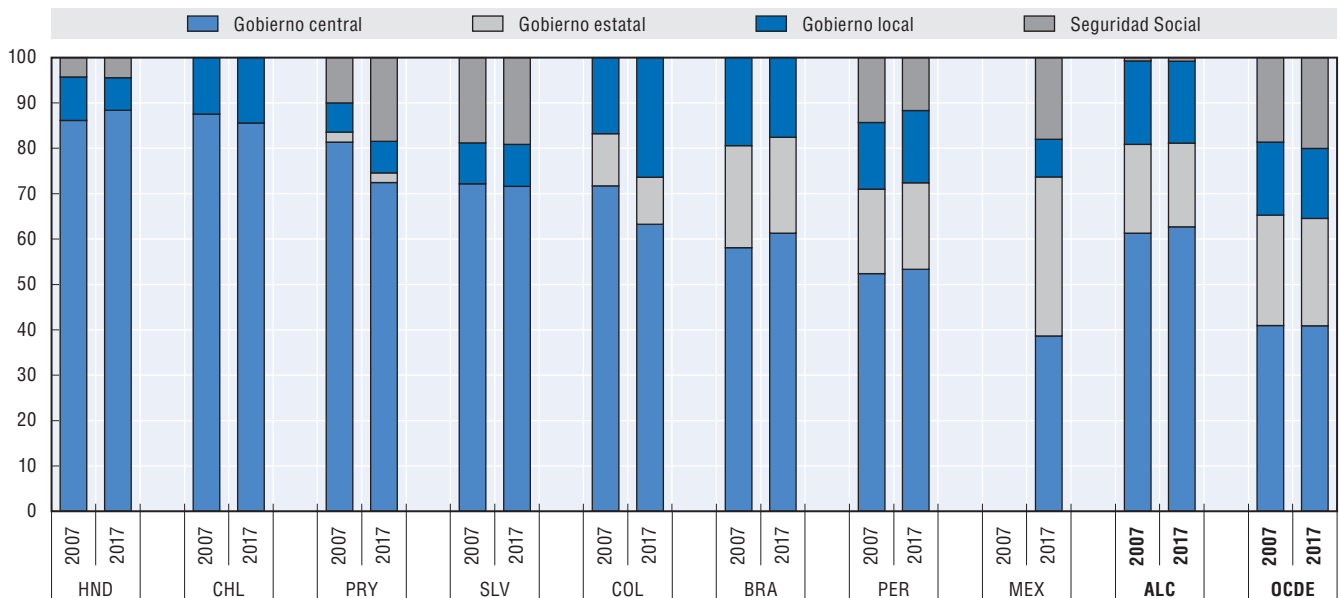
2.16. Distribución de los ingresos de la administración pública entre los diferentes niveles de gobierno, 2007 y 2017



Fuente: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Los datos del promedio de la OCDE provienen de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094412>

2.17. Distribución de los gastos de la administración pública entre diferentes niveles de gobierno, 2007 y 2017



Fuente: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Los datos del promedio de la OCDE provienen de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094431>

2.8. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR TRANSACCIÓN ECONÓMICA

Para llevar a cabo sus funciones principales (por ejemplo, proporcionar bienes y servicios individuales y colectivos a la población), los gobiernos gastan sus recursos de varias maneras: haciendo transferencias (por ejemplo, subsidios y beneficios sociales), comprando bienes y servicios (por ejemplo, vacunas para hospitales), pagando a sus empleados y realizando inversiones, entre otros. El desglose de gastos por transacción económica permite analizar las prioridades y compromisos del gobierno, así como su margen de maniobra para modificar la asignación de fondos públicos.

En 2017, los países de ALC (con datos disponibles) gastaron el 29,7% en beneficios sociales (por ejemplo, pensiones, transferencias monetarias condicionadas). Esto representa un aumento de 9,2 p.p. desde 2007. En comparación, los países de la OCDE gastaron 40,9% en esta transacción, con un aumento comparativamente menor (4,1 p.p.) desde 2007. La remuneración de los empleados es segunda en relevancia tanto en ALC como en los países de la OCDE, aunque con una participación mayor en aquella (26%) que en esta (22,8%). Sin embargo, su porción ha disminuido 1,3 p.p. desde 2007 en ALC. En esta región, el ingreso por propiedad (principalmente pagos de la deuda) representaron el 15,3% de los gastos en 2017. Los países de la OCDE gastaron alrededor de la mitad: 6,5% en promedio. Las tendencias también divergen: en ALC crecieron 0,8 p.p. desde 2007 y estos países disminuyeron 1,4 p.p. en el mismo período. Por lo tanto, la proporción dedicada a estos gastos continúa siendo significativamente mayor que la de los países de la OCDE, que acumularon deuda en la última década.

Existen grandes variaciones en la región: Brasil -el país de mayor gasto entre los de ALC con datos disponibles-, gastó 36,7% en beneficios sociales y 18,7% en subsidios, muy por encima del promedio. Paraguay (42,3%), El Salvador (40,4%) y Honduras (40,3%), gastaron más que el promedio en la remuneración de los empleados. Por el contrario, los beneficios sociales en Honduras representaron solo el 1,4% de los gastos, los ingresos por propiedad representaron el 3,1% en Chile y Colombia gastó el 18,7% en la compensación de los empleados.

En promedio, en ALC, los subsidios (por ejemplo, al combustible o a la electricidad) ascendieron al 1,6% de los gastos en 2017, por debajo del 3,4% en 2007, y por lo tanto, gastan relativamente menos que los países de la OCDE (2,0%). Chile redujo la participación de esta transacción del 22,2% en 2007 al 4,9% en 2017 y aumentó la participación de subvenciones y otros gastos del 5,9% al 25,7%. Esto refleja un cambio en el sistema de transferencias, que entre otras cosas, refleja la gratuidad de la educación desde 2016 mediante la cual se busca favorecer el ingreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad y de tal modo, hacerla más igualitaria (OECD, 2018).

En 2017, el gasto de inversión representó el 4,6% de los gastos del gobierno en ALC, lo que implica una reducción de -2,7 p.p. desde 2007, y los países de la OCDE gastaron 7,7% en esta transacción. Perú invirtió cuatro veces el promedio de ALC (18,5%) y Paraguay, 15,8%; fueron los únicos en aumentar tal proporción en la región (3,4 p.p. y 3,2 p.p. respectivamente). Brasil asignó la mitad de la participación

regional, y la mayor reducción se observó en Colombia: -5,1 p.p. desde 2007 (ver sección 2.9)

Al analizar los gastos del gobierno como porcentaje del PIB, en 2017 los países de ALC gastaron el 10,2% en beneficios sociales, en comparación con 16,5% en los de la OCDE. Brasil gastó más que el promedio de la OCDE (17,6% del PIB) en esta transacción. Honduras gastó solo el 0,4% del PIB en beneficios sociales, la participación más pequeña entre los países de ALC. La remuneración de los empleados ascendió, en promedio, al 8,9% del PIB en ALC, una proporción similar a la OCDE (9,2%). Brasil (13,3%), Honduras (10,5%) y Paraguay (10,3%) fueron los que más gastaron en esta categoría.

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI, que aplica los conceptos establecidos en el *Manual de Estadísticas de Finanzas del Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con los otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Los gastos abarcan el consumo intermedio, la remuneración de los empleados, los subsidios, los ingresos de la propiedad (incluidos los gastos por intereses), los beneficios sociales (que consisten en beneficios sociales distintos de las transferencias sociales en especie y las transferencias sociales en especie proporcionadas a los hogares a través de productores del mercado), subvenciones y otros gastos (principalmente transferencias corrientes y de capital, pero también otros gastos menores como otros impuestos sobre la producción, impuestos corrientes sobre la renta y la riqueza, etc. y el ajuste por el cambio en los derechos de pensión) e inversiones. Todas estas transacciones a nivel de administración pública se registran de forma consolidada (a saber, las transacciones entre niveles de gobierno se compensan). Para el promedio de la OCDE, los datos se derivan de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.

Bibliografía complementaria

OECD (2018), *OECD Economic Surveys: Chile 2018*, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/110.1787/eco_surveys-chl-2018-en

Notas para los gráficos

Los datos de México, Perú y Paraguay se registran sobre una base en efectivo.

Los datos de México y Colombia se refieren a 2008 en lugar de 2007. Los datos de Honduras se refieren a 2015 en lugar de 2017. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados.

2.8. GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR TRANSACCIÓN ECONÓMICA

2.18. Estructura del gasto de la administración pública por transacción económica, 2007 y 2017

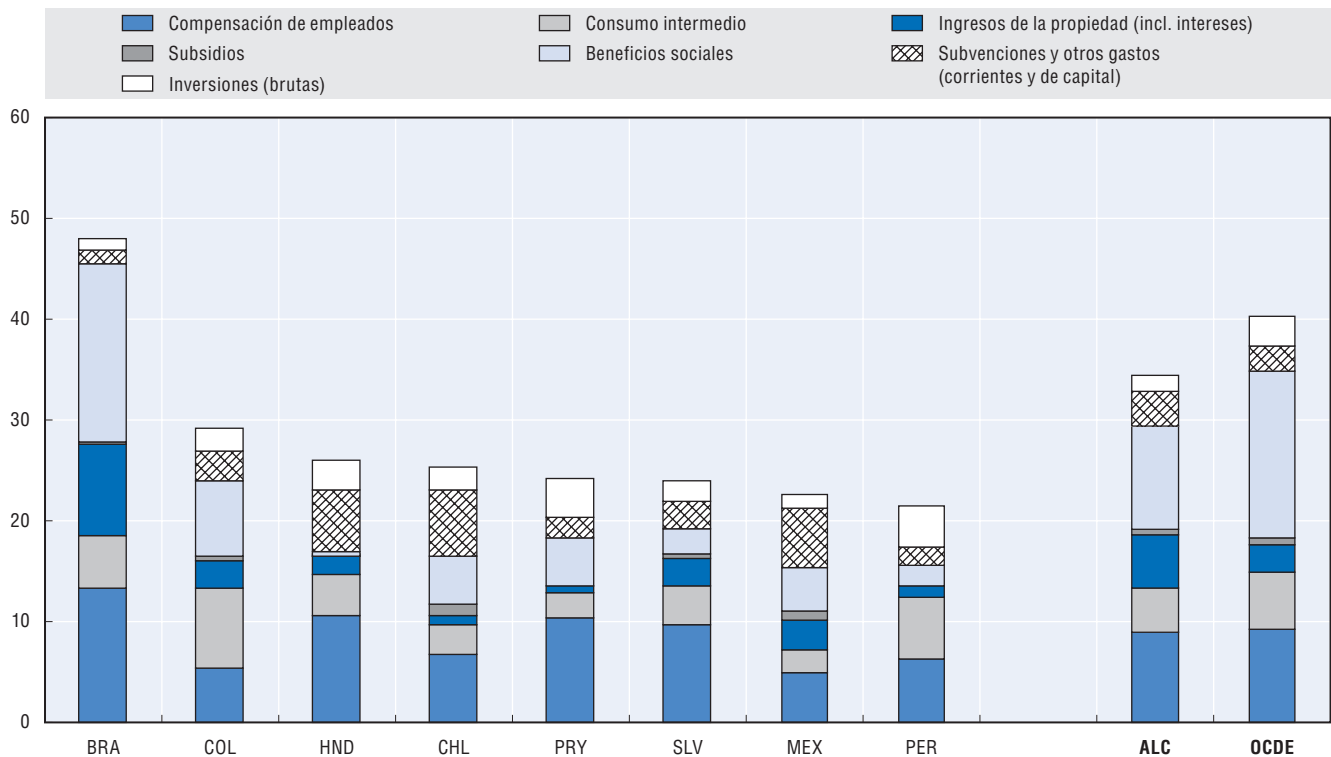
Porcentaje del total de gastos

	Compensación de empleados		Consumo intermedio		Subsidios		Ingresos de la propiedad (incl. intereses)		Beneficios sociales		Subvenciones y otros gastos (corrientes y de capital)		Inversiones (brutas)	
	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017
Brasil	30.6	27.6	16.4	11.0	0.9	0.8	18.3	18.7	26.5	36.7	1.9	2.9	5.3	2.3
Chile	24.0	26.8	12.9	11.9	22.2	4.9	3.0	3.1	20.5	18.8	5.9	25.7	11.6	8.9
Colombia	21.3	18.7	17.6	26.8	1.2	1.3	10.5	9.5	19.6	25.6	16.6	9.9	13.2	8.1
El Salvador	38.2	40.4	15.8	16.3	2.8	1.5	11.1	10.9	10.5	10.6	10.3	11.6	11.2	8.6
Honduras	44.2	40.3	15.4	15.9	5.2	0.2	2.5	7.0	1.1	1.4	17.2	23.2	14.4	12.0
México	21.6	22.2	7.7	9.9	7.4	3.6	10.2	12.9	9.7	18.7	35.3	26.6	8.1	6.1
Paraguay	47.6	42.3	11.1	10.5	0.0	0.0	4.3	3.2	16.3	19.5	8.1	8.7	12.6	15.8
Perú	29.4	29.9	24.5	27.9	0.0	0.0	9.8	5.2	14.4	9.3	6.8	9.2	15.1	18.5
ALC	27.2	26.0	14.2	12.7	3.4	1.6	14.5	15.3	20.5	29.7	12.8	10.0	7.3	4.6
OCDE	24.1	22.8	14.6	14.1	1.9	2.0	7.8	6.5	36.7	40.9	5.6	6.0	9.3	7.7

Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934094450>

2.19. Gasto público por transacción económica como porcentaje del PIB, 2017



Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888934094469>

2.9. GASTO PÚBLICO EN INVERSIÓN

La inversión pública crea la infraestructura pública esencial para el crecimiento económico a largo plazo y el bienestar social, por ejemplo, apoya la provisión de servicios públicos (por ej., escuelas). La inversión en infraestructura de transporte y otros proyectos a gran escala sirve para mejorar la productividad y la competitividad. Los gobiernos también pueden invertir en investigación y desarrollo, lo que contribuye a difundir nuevas herramientas y conocimientos que fomentan la productividad y contribuyen a crear empleo en sectores de alto valor agregado.

En 2017, la inversión pública representó, en promedio, el 4,6% del gasto público total en los países de ALC con datos disponibles. Esta cifra es menor que en los países de la OCDE, donde fue del 7,7%. La inversión en la región de ALC es extremadamente heterogénea; Perú (18,5%) y Paraguay (15,8%) son los que más invirtieron en relación al gasto público y donde aquella aumentó más entre 2007 y 2017: 3,4 y 3,2 p.p. respectivamente. Como parte de su estrategia nacional de desarrollo (el “Plan Bicentenario: Perú 2021”) emitida en 2010, el gobierno peruano estableció objetivos ambiciosos en términos de inversión pública, particularmente en el sector del transporte, para cerrar brechas con otros países de la región, mejorar el bienestar de la población y fomentar el crecimiento económico. Igualmente, Paraguay comenzó un proceso acelerado de mejora de la infraestructura en 2013, para actualizar su red de carreteras y realizar instalaciones hidráulicas que mejorarán la calidad del agua y el saneamiento.

La inversión como porcentaje del PIB en los países de ALC alcanzó 1,6% en 2017, por debajo del promedio de la OCDE de 3,1%. Si bien la inversión disminuyó en ambos grupos, lo hizo a un ritmo más rápido en el primero (-0,7 p.p.) que en el segundo (-0,5 p.p.). El gasto de inversión tuvo la mayor disminución en Colombia (-1,8 p.p.) y Brasil (-1 p.p.). En Colombia, esta tendencia podría explicarse por la gran shock del precio del petróleo en 2015-16 que afectó los ingresos del gobierno, así como por los ajustes presupuestarios para cumplir con los objetivos fiscales, que suelen implicar una reducción de la inversión. En el caso de Brasil, el creciente déficit público ha llevado a reducciones en la inversión pública.

La inversión puede tener mayores rendimientos económicos en regiones con un nivel de desarrollo relativamente más bajo. El gasto de inversión en todos los niveles del gobierno es crucial para asegurar el crecimiento a largo plazo y reducir la desigualdad. Para los países de ALC con información disponible, el 35,2% del gasto de inversión directa de los gobiernos se realizó a nivel local en 2017 en comparación con el 29,1% en los países de la OCDE. Para los países de ALC, esto representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales desde 2007. En Colombia y Perú, los gobiernos locales realizaron más del 40% de la inversión total en 2017.

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI, que aplica los conceptos establecidos en el *Manual de Estadísticas de Finanzas del Gobierno* (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con los otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Sin embargo, existen diferencias entre ambos en varios casos, lo que condujo al establecimiento, en gran medida, de criterios de correspondencia entre los dos sistemas estadísticos. Los marcos MEFP y SCN han sido revisados y los países han implementado varios estándares estadísticos.

La inversión pública incluye la formación bruta de capital y adquisiciones, menos la disposición de activos no producidos, no financieros. La formación bruta de capital fijo (también denominada inversión fija) es el componente principal de la inversión pública, que consiste principalmente en infraestructura de transporte, pero también incluye edificios de oficinas, viviendas, escuelas, hospitales, etc. La inversión pública se registra en términos brutos (a saber, formación bruta del consumo de capital fijo, a menos que se indique lo contrario). La administración pública está compuesta por el gobierno central, estatal y local y fondos de la seguridad social. El nivel estatal aplica en los estados federales de Brasil y México y en países altamente descentralizados (Colombia, Paraguay y Perú). Para el promedio de la OCDE, los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN. Los datos sobre estos indicadores están disponibles para un conjunto limitado de países de ALC.

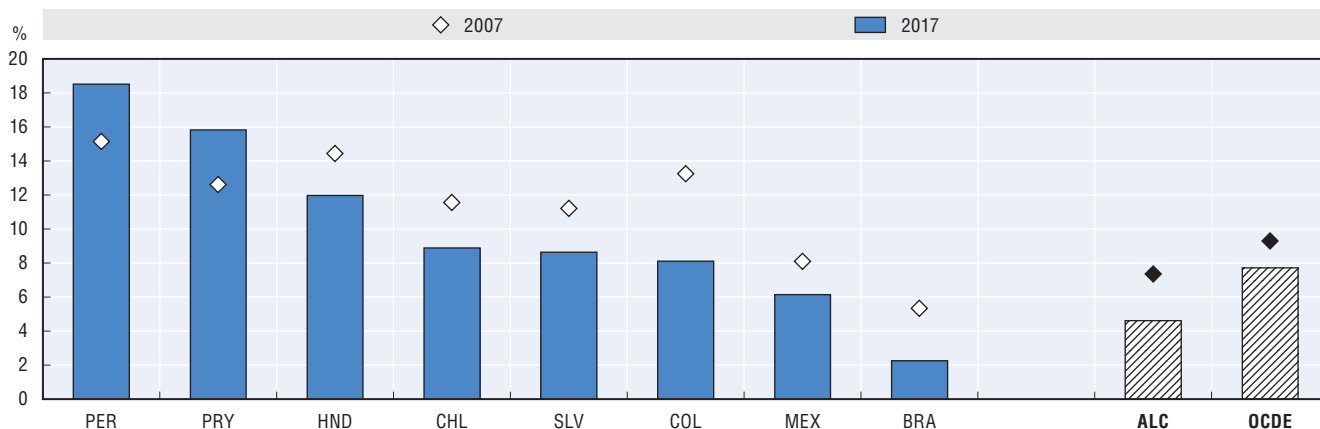
Bibliografía complementaria

- BID (2019), *Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante*, Publicaciones del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroeconomico_de_America_Latina_y_el_Caribe_2019_Construir_oportunidades_para_crecer_en_un_mundo_desafiante.pdf
- OCDE (2019), *Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2019*, Publicaciones de la OCDE, París, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-oecd-colombia-2019_805f2a79-es
- OCDE (2016), *OECD Public Governance Reviews Peru: Integrated Governance for Inclusive Growth* Publicaciones de la OCDE, París. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_9789264265226-es

Notas para los gráficos

- Los datos de México, Perú y Paraguay se registran sobre una base en efectivo. Los datos de Honduras se refieren a 2015 en lugar de 2017. Los datos de Colombia y México se refieren a 2008 en lugar de 2007. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados.
- 2.22 Los fondos de seguridad social están incluidos en el gobierno central de Brasil, Chile y Colombia.

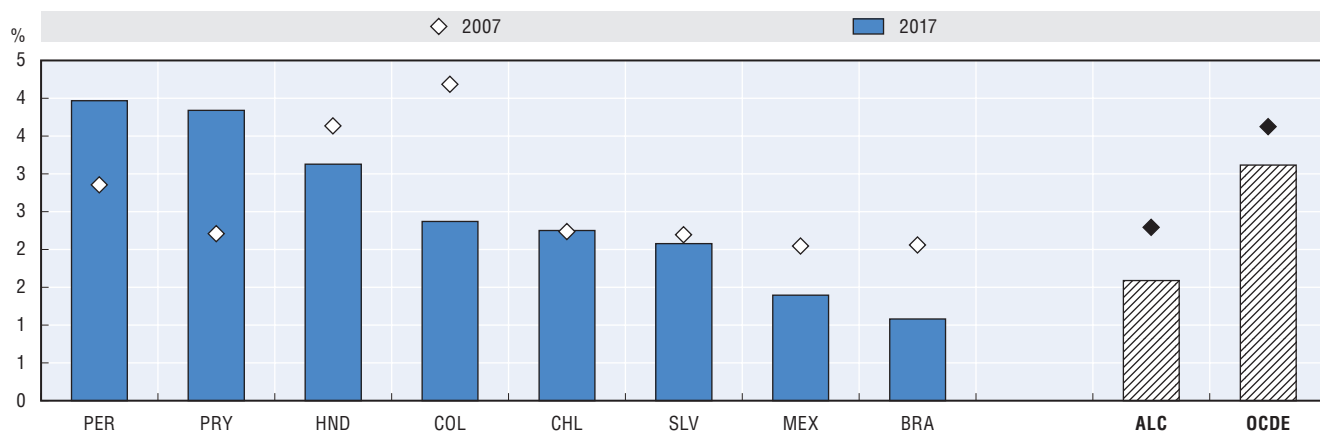
2.20. Inversión del pública como porcentaje del total del gasto público, 2007 y 2017



Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094488>

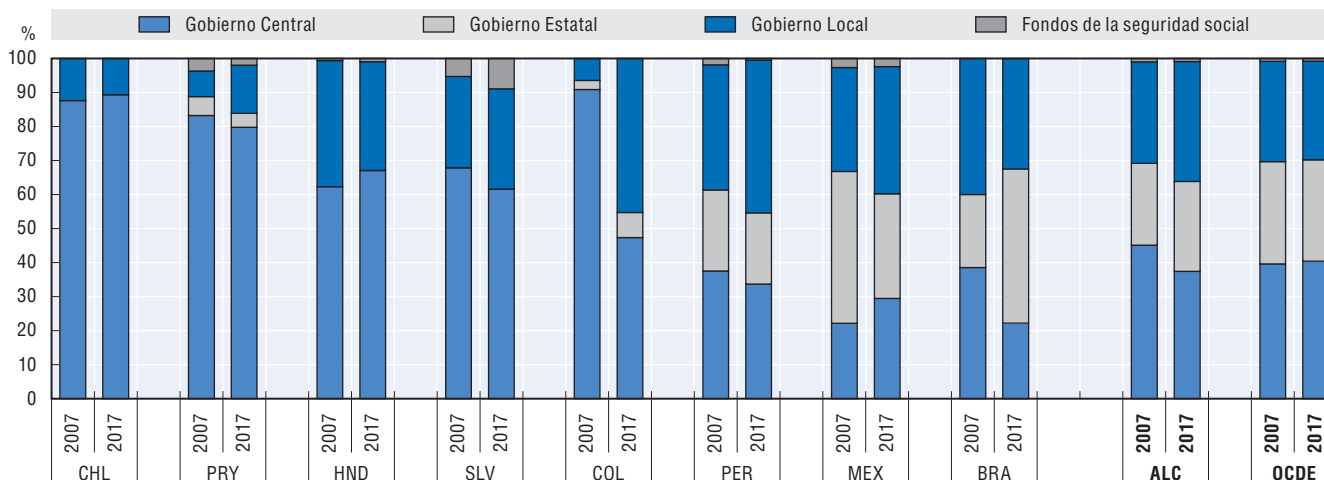
2.21. Inversión pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2017



Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094507>

2.22. Distribución del gasto en inversión ente los diferentes niveles de gobierno, 2007 y 2017



Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094526>

2.10. INGRESOS FISCALES DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (RNNR)

Varios países de ALC están dotados de recursos naturales no renovables (RNNR), principalmente hidrocarburos y metales y minerales que constituyen una fuente importante de ingresos. Sin embargo, estos son limitados y el flujo de ingresos que generan son altamente volátiles, ya que sus precios se fijan en los mercados internacionales. Además, la gestión de RNNR debe considerar la equidad intergeneracional, garantizando que su agotamiento no comprometa ni restrinja las oportunidades de las generaciones futuras, así como la sostenibilidad medioambiental. ALC ha experimentado dos períodos de altos precios de RNNR recientemente, entre 2006 y 2008 y entre 2010 y 2014. Sin embargo, pocos países (por ejemplo, Colombia y Chile) han creado fondos de reserva y puesto en marcha mecanismos de estabilización destinados a contrarrestar la posible volatilidad de precios.

En promedio, en los países de ALC con información disponible, los ingresos fiscales de RNNR alcanzaron el 2,9% del PIB en 2017, una fuerte disminución desde 2007, cuando fue del 6,9%. En 2017, como porcentaje del PIB, Bolivia (5,9%) y Ecuador (5,6%) reportaron los valores más altos, mientras que Colombia (1,2%) y Chile (0,9%) los más bajos. Entre 2007 y 2017, los ingresos de RNNR disminuyeron en todos los países de ALC con información disponible. Esto refleja la interacción entre la evolución de los precios y el nivel de producción, además de factores específicos a cada país que afectan sus ingresos. Las mayores reducciones entre 2007 y 2017 tuvieron lugar en Trinidad y Tobago (11,7 p.p.) y Chile (7,1 p.p.). El primero depende en gran medida del petróleo y del gas natural como principal actividad económica, que por un lado se está contrayendo y, por otro, ha sido afectada por la disminución de precios. En el caso de Chile, y a pesar de aumentos en la producción, los precios del cobre aún están por debajo de los niveles de 2007, aunque un marco sólido de política macroeconómica ha contribuido a aminorar el impacto del final del auge de los *commodities*, contribuyendo a un bajo desempleo, un consumo familiar resistente y un sector financiero estable (OCDE 2018).

Los ingresos de RNNR se pueden dividir en dos categorías: hidrocarburos y metales y minerales. Chile no tiene extracción de petróleo y en Perú (por ejemplo, cobre, oro, plomo y plata) la minería es relativamente más importante que los hidrocarburos como fuente de ingresos. Los ingresos de RNNR siguen siendo una fuente clave de financiación en varios países de ALC, por ejemplo, representan el 32% y el 28% de los ingresos totales en Bolivia y México respectivamente. Sin embargo, en todos los países con información disponible, la participación relativa de RNNR como fuente de ingresos disminuyó entre 2007 y 2017, lo que aumentó la presión sobre los gobiernos para encontrar fuentes alternativas de financiamiento o implementar ajustes.

Metodología y definiciones

Los datos provienen de la base de datos CEPALSTAT. Los ingresos tributarios de los recursos naturales no renovables se refieren a pagos de impuestos y alquileres de propiedades que el sector público recibe por la explotación de estos recursos. Estos pagos se clasifican por cada tipo de recurso natural no renovable y por tipo de instrumento fiscal, los regímenes fiscales de dichos ingresos son regalías, impuesto sobre la renta, otros impuestos a los ingresos y otros gravámenes. Por ejemplo, los pagos de regalías se refieren al derecho a la extracción de petróleo y gas o a explotar otros recursos minerales y normalmente se consideran ingresos no tributarios, porque se refieren al uso de tierras o recursos que pertenecen al Estado. Los recursos naturales no renovables se refieren a metales y minerales e hidrocarburos. Los ingresos fiscales de los hidrocarburos incluyen tanto los de actividades de exploración y producción como las de refinación y comercialización. El gobierno general y las empresas públicas constituyen el sector público, estas en el caso de los recursos naturales no renovables, son empresas no financieras. Para más información puede consultar: <https://cepalstat-prod.cepal.org>

Bibliografía complementaria

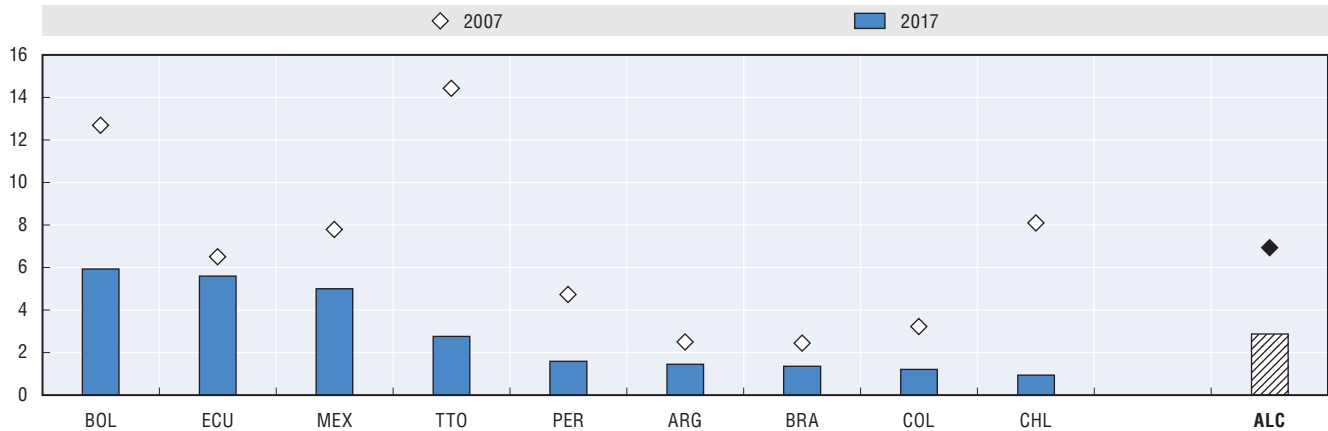
- OCDE et al. (2019), *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2019*, Publicaciones de la OCDE, París, https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-2019_25666b8d-en-es?mlang=es
- CEPAL (2019), *Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, <https://www.cepal.org/en/publications/44517-fiscal-panorama-latin-america-and-caribbean-2019-tax-policies-resource>.
- OCDE (2018), *OECD Economic Surveys: Chile 2018*, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chl-2018-en

Notas para los gráficos

- 2.25 Los ingresos de RNNR y los ingresos totales se expresan en moneda nacional a precios corrientes.

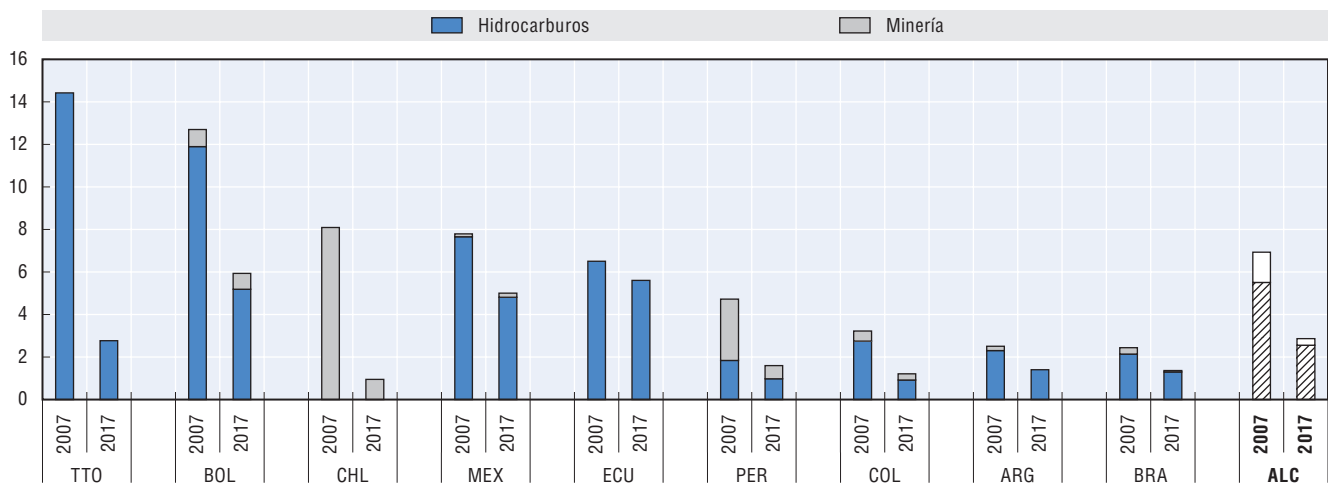
2.10. INGRESOS FISCALES DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (RNNR)

2.23. Ingresos fiscales de recursos no renovables como porcentaje del PIB, 2007 y 2017



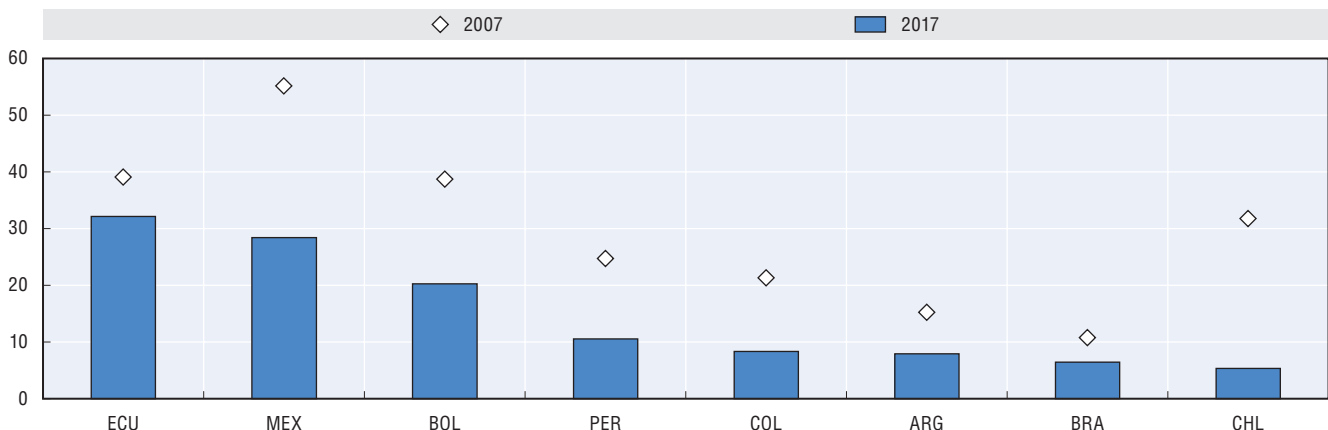
Fuente: CEPAL, basada en datos sobre Ingresos Fiscales provenientes de recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe
 StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094545>

2.24. Ingresos fiscales de los recursos no renovables por país y commodity como porcentaje del PIB, 2007 y 2017



Fuente: CEPAL, basada en datos sobre Ingresos Fiscales provenientes de recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe
 StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094564>

2.25. Participación relativa de los ingresos de los recursos naturales no renovables como parte de los ingresos totales, 2007 y 2017



Fuente: CEPAL, basada en datos sobre Ingresos Fiscales provenientes de recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe
 StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888934094583>